

PROYECTO DE LEY N° ____ de 2012 CÁMARA.

“Por la cual se reglamenta la actividad del vendedor informal y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Definición de Vendedor Informal. Para los efectos de la presente Ley, las personas que se dediquen voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público, como medio básico de subsistencia, se denominarán vendedores informales.

Artículo 2°. Clasificación de Vendedores Informales. Para los efectos de la presente Ley, los vendedores informales se clasifican de la siguiente manera:

- a) *Vendedores Informales Ambulantes:* Los que realizan su labor recorriendo las vías y demás espacios de uso público, sin estacionarse temporal o permanentemente en un lugar específico, utilizando un elemento móvil portátil o su propio cuerpo para transportar las mercancías.
- b) *Vendedores Informales Semiestacionarios:* Los que realizan su labor recorriendo las vías y demás espacios de uso público, estacionándose de manera transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo día, utilizando elementos tales como carretas, carretillas, tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para transportar las mercancías.
- c) *Vendedores Informales Estacionarios:* Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o elementos similares.
- d) *Vendedores informales periódicos:* Realizan sus actividades en días específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas del día en jornadas que pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas.
- e) *Vendedores informales ocasionales o de temporada:* Realizan sus actividades en temporadas o períodos específicos del año, ligados a festividades, o eventos conmemorativos, especiales o temporadas escolares o de fin de año.

Artículo 3°. Organización de los vendedores informales. Los vendedores informales podrán organizarse en cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas o cualquier forma de organización que propendan por su progreso, desarrollo y por el mejoramiento de su nivel de vida.

Artículo 4°. Registro del Vendedor Informal. Para ejercer la actividad de vendedor informal, se requiere registro en el respectivo Municipio o Distrito.

El cumplimiento de este requisito, será acreditado por los alcaldes distritales o municipales, o los funcionarios a quienes estos deleguen, mediante la expedición de la certificación correspondiente.

El Gobierno Nacional, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, diseñará un formulario único para la solicitud, trámite, aprobación y certificación del Registro, teniendo en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

- Requisitos de Inscripción por parte de quienes a la entrada en vigencia de la presente Ley realicen la actividad de vendedores informales;
- Restricciones para el ejercicio de la venta informal;
- Documentos que deba adjuntar el solicitante, y requisitos para la comercialización ambulante de productos alimenticios.

Las autoridades municipales y distritales promoverán capacitaciones para divulgar las normas vigentes sobre ventas informales y los requisitos para el ejercicio de esta actividad, así como los derechos, deberes y obligaciones de los vendedores informales. Así mismo, promoverán campañas, incentivos y desarrollarán políticas, programas y proyectos para que los vendedores informales superen su condición y pasen a vincularse a empleos y actividades económicas formales.

De igual manera, las autoridades municipales y distritales procurarán la vinculación económica del sector privado al fortalecimiento presupuestal del Fondo Especial de Cooperación de Vendedores Informales, de que trata el artículo 14 de la presente Ley, y podrán instituir programas de reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas, cuando estas vinculen, entre sus empleados, a personas que se encuentren registradas como vendedores informales.

Los registros expedidos con anterioridad por autoridades municipales y distritales tendrán vigencia hasta su fecha de expiración.

Los vendedores informales que siendo amparados bajo fallos judiciales, o con la calidad de jefes o jefas cabezas de hogar, o en condición de discapacidad, o que tengan a su cuidado personas con limitaciones físicas, síquicas y sensoriales, o enfermas terminales o afectadas por enfermedades ruinosas y/o catastróficas, que a la entrada en vigencia de la presente Ley, estén dedicados a las ventas informales, gozarán de especial prioridad en el otorgamiento del registro respectivo y en el acceso a los programas para la superación de sus condiciones de informalidad económica.

El registro es personal e intransferible, expresará la clase de mercancías o servicios que podrá vender su beneficiario, y le permitirá al vendedor informal ejercer libremente su actividad.

Artículo 5°. Requisitos para acceder al Registro. Para acceder al registro, el vendedor informal deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.
2. Acreditar ante la alcaldía local, municipal o distrital, la propiedad de la mercancía y su procedencia lícita.
3. Informar que se encuentra en situación de desempleo.
4. Indicar el lugar de su residencia.

Las autoridades municipales y distritales encargadas de expedir el registro, podrán solicitar de oficio, al Ministerio de Salud, autorizar la consulta oficial de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), y a cualquier otro organismo público o privado, la certificación del vendedor informal que va a ser sujeto de registro para establecer si se encuentra o no afiliado al sistema de seguridad social.

Parágrafo. La inscripción en el registro de vendedor informal no dará lugar a indemnización ni reparación por el uso del espacio público con fines de explotación económica. Tampoco hará responsable al Estado Colombiano, ni al Gobierno Municipal o Distrital por daño que cause el vendedor informal en el ejercicio de su actividad.

Artículo 6°. Organización del Registro de Vendedores Informales. Las alcaldías municipales y distritales formarán el registro de los vendedores informales, detallando claramente el nombre, documento de identidad, la clase de mercancías o servicios que vende y la clasificación a la que corresponda el ejercicio de su actividad y en este último caso el lugar de ejercicio.

A partir de la vigencia de la presente Ley, las alcaldías municipales y distritales iniciarán la formación del registro de los vendedores informales que al momento desarrollen la actividad en cualquiera de sus clasificaciones. Así mismo en él se incluirán todas las novedades correspondientes a los vendedores informales, tales como las sanciones impuestas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley o la incorporación del vendedor informal a una actividad comercial formal. El registro deberá ser actualizado anualmente.

Para la formación e implementación del registro, las autoridades municipales y distritales podrán celebrar convenios inter administrativos.

Artículo 7°. Deberes y responsabilidades de los vendedores informales. El ejercicio de la venta informal genera, entre otros, los siguientes deberes y responsabilidades a cargo de los vendedores informales:

1. Ejercer la actividad de conformidad con lo establecido en el registro.
2. Mantener limpio y ordenado el sitio o los sitios en los que ejerce su labor y su zona adyacente.
3. Portar copia del registro en todo momento en que ejerce la actividad.
4. Abstenerse de anunciar sus productos o servicios mediante la utilización de altavoces, bocinas u otros medios visuales o auditivos que alteren la tranquilidad ciudadana.
5. No ocupar mayor espacio del autorizado y registrado por las autoridades.
6. Garantizar que las mercancías comercializadas sean de procedencia lícita, y portar las facturas o documentos de origen de las mismas. Cuando se trate de bienes de procedencia ilícita, podrán ser aprehendidos por las autoridades de policía y puestos a disposición de la autoridad competente.

7. Garantizar que los alimentos comercializados, ya sea producidos por el mismo vendedor informal o por terceros, cumplan con todos los requisitos de salubridad, higiene e inocuidad, y dar estricto cumplimiento a las normas sobre manipulación de alimentos.
8. No permitir el uso de su registro a terceras personas.

Artículo 8°. Sanciones por infracción a los deberes y responsabilidades de los Vendedores Informales. Las siguientes serán las sanciones a aplicar a los vendedores informales, por violación a sus deberes y responsabilidades:

- 8.1. Amonestación privada: Consiste en el llamado de atención acerca de la conducta irregular y en la instrucción sobre la manera adecuada de comportamiento, para lo cual el vendedor informal deberá cursar una capacitación organizada por las autoridades de policía.
- 8.2. Suspensión del registro hasta por el término de un (1) mes, en caso de reincidencia, con la consecuente imposibilidad temporal de ejercer su actividad.
- 8.3. Cancelación definitiva del registro, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar cuando la infracción cometida esté relacionada con las siguientes faltas:
 - 8.3.1. Comercialización de alimentos en mal estado de conservación, o que no cumplan con las normas de higiene, salubridad e inocuidad establecidas legal y reglamentariamente.
 - 8.3.2. Comercialización de sustancias estupefacientes o alucinógenas.
 - 8.3.3. Comercialización de bienes comprometidos en delitos de hurto, receptación, contrabando, falsedad marcaría u otros delitos contra el patrimonio, derechos de autor o a la propiedad privada.
 - 8.3.4. Ejercicio de la actividad de vendedor ambulante a pesar de haber sido vinculado a los programas de superación de la actividad informal, salvo que el programa lo permita.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las demás derivadas de las previsiones legales o reglamentarias relativas a seguridad, salubridad y manipulación de alimentos, y serán impuestas por los alcaldes municipales o distritales, o sus delegados, de conformidad con lo dispuesto por el Código Penal Colombiano, Código de Policía o en cualquier otra norma que resulte infringida.

Artículo 9. Garantías del vendedor informal. Las autoridades de policía, sin que medie orden de autoridad competente, no podrán suspender las actividades de los vendedores informales que cuenten con registro vigente, levantar puestos de ventas autorizados ni aprehender sus mercancías, salvo cuando encontraren sustancias o bienes ilícitos o cuando se viole cualquier norma penal, caso en el cual procederán a su aprehensión inmediata de conformidad con las normas vigentes.

Las mercancías decomisadas serán trasladadas con el acta original a los sitios de almacenamiento dispuestos por las autoridades municipales o distritales, los

cuales deberán estar acondicionados para evitar el deterioro de los bienes. La autoridad competente decidirá, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, el destino de los bienes decomisados y tomará en consideración su condición de perecedero o no perecedero, para priorizar su destinación.

Artículo 10. Distribución y venta de contenidos noticiosos, informativos y de opinión. La distribución de contenidos noticiosos, informativos y de opinión por parte de las empresas de periódicos, gozará de especial protección; en consecuencia, el Estado adoptará las medidas que garanticen la libre distribución y venta de periódicos en el espacio público.

Parágrafo. Los voceadores de prensa no requerirán de licencias o permisos de ninguna naturaleza para vender periódicos en el espacio público.

Artículo 11. Traslado de vendedores informales. Cuando las autoridades locales en ejercicio del deber constitucional de preservar el espacio público, adopten decisiones administrativas que puedan afectar el derecho al trabajo de vendedores informales estacionarios que hayan ejercido su actividad de manera voluntaria con el consentimiento tácito o expreso de las autoridades, estas deberán establecer medidas adecuadas, necesarias y suficientes que permitan su reubicación en las mismas o en mejores condiciones o el otorgamiento de medidas alternativas económicas que garanticen su subsistencia.

Artículo 12. Amoblamiento Urbano. Los concejos distritales y municipales, podrán definir mediante acuerdo, con observancia de las normas superiores en esta materia, los tipos de amoblamiento urbano de los que se deberán dotar sus respectivos territorios para ejercer la actividad de ventas informales estacionarias, garantizando la conservación, mantenimiento y disfrute del espacio público por parte de todos los ciudadanos, así como las condiciones, requisitos y tarifas para su explotación económica; esto último si así lo estimaren conveniente.

Artículo 13. Superación de la Actividad informal. Con el propósito de superar gradualmente la actividad de las ventas informales en todo el territorio nacional, las autoridades nacionales y territoriales podrán disponer de recursos para la capacitación de vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), propiciar su vinculación a la actividad formal mediante contratos de aprendizaje, implementar programas de financiamiento a microempresas constituidas por vendedores informales, crear y construir concentraciones comerciales con el fin de involucrar en la actividad comercial formal a las personas que se registren.

Los vendedores informales que logren vincularse a la actividad formal de la economía o empleos laborales no podrán seguir ejerciendo la actividad de vendedor informal en cualquiera de sus modalidades en el espacio público.

Además de lo dispuesto en el inciso 1°, los entes territoriales podrán desarrollar planes especiales para contribuir a la atención de las necesidades básicas insatisfechas de los vendedores informales, en materia de vivienda y educación.

Artículo 14. Fondo Especial de Cooperación de Vendedores Informales. En los municipios y distritos se creará por parte del Concejo un Fondo Especial de Cooperación de Vendedores Informales, que deberá estar adscrito a la secretaría de gobierno municipal, distrital o departamental.

El objeto del Fondo será gestionar la obtención de recursos económicos que serán orientados a la estructuración y financiación de programas y proyectos promover la formalización e incorporación en la economía formal de los vendedores informales.

El fondo tendrá entre otras, las siguientes funciones:

- a. Desarrollará programas de capacitación a los vendedores informales con el propósito de facilitar su proceso de incursión a la actividad económica formal
- b. Participará en la formulación y ejecución de los programas generales de las administraciones departamentales, municipales y distritales que estén orientados promover la inserción en el ámbito laboral o económico formal de los vendedores informales
- c. Desarrollará proyectos productivos como alternativa para contribuir al proceso de formalización de los vendedores informales.

Harán parte de los recursos del fondo, los que se llegaren a generar por la explotación económica del uso del suelo destinado a las ventas informales; los aportes de las organizaciones de vendedores informales de que trata el artículo 3º de esta Ley; los aportes del sector privado y de los gremios económicos que se vinculen a los programas indicados en los artículos anteriores.

Los concejos municipales y distritales fijarán los principios, fines, actividades, y demás funciones así como la estructura de la administración de dicho Fondo.

Artículo 15. Locales Comerciales de Interés Social: Para promover la inclusión social de vendedores informales a la actividad económica formal, en todo Proyecto de construcción inmobiliaria residencial y vecinal, de centros comerciales, establecimientos de grandes superficies y parques comerciales, que se realicen en el país, se deberá asegurar la construcción y comercialización de Locales Comerciales de Interés Social (LCIS).

Será requisito para obtener la licencia de construcción de estos proyectos, que el desarrollador o constructor de la obra, acredite el cumplimiento de esta disposición.

Parágrafo 1. El desarrollador y/o comercializador notificará a las autoridades Municipales y Distritales, de la terminación del proyecto de construcción e inicio de la etapa de comercialización, la que contendrá una relación detallada del total de Locales Comerciales de Interés Social a ofertar, lo que se pondrá en conocimiento público de los vendedores informales.

La prelación de primera oferta en la comercialización de los locales de interés social será para los vendedores informales que de manera individual u organizada quieran ofertar y se encuentren en los registros Municipales y Distritales.

Las autoridades servirán de garantes del cumplimiento a lo aquí dispuesto. En el evento de no existir ninguna intención de compra agotado el procedimiento, el comercializador podrá disponer del inmueble.

Parágrafo 2. Mediante decreto reglamentario que será expedido dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional regulará un sistema de emprendimiento y acompañamiento con programas especializados de asignación y financiación, para que los vendedores informales y las organizaciones debidamente registradas, que certifiquen las autoridades, puedan acceder a la propiedad de Locales Comerciales Convencionales y/o No Convencionales de Interés Social a largo plazo.

Artículo 16. De la Cesión. Sobre la cesión de que trata el Artículo 7 de la Ley 9 de 1989 y normas urbanas concordantes, para proyectos de construcción inmobiliaria residencial y vecinal, de centros comerciales, de establecimientos de grandes superficies y de parques comerciales, sobre el 100 % de la cesión al Municipio o Distrito, se reservará un porcentaje no inferior al 15% ni mayor al 25% para ser destinado a la construcción de Locales Comerciales de Interés Social.

Parágrafo: El Gobierno Nacional reglamentará lo aquí dispuesto, señalando la forma en que operará el acompañamiento institucional para asegurar el objetivo propuesto en esta ley.

Artículo 17. Política Pública. Dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo diseñará y ejecutará una política pública para todo el territorio nacional que promueva la vinculación del vendedor informal al sector de la actividad económica formal, mediante la creación de mecanismos que faciliten entre otras la capacitación técnica, educación y generación de empresa.

El Ministerio rendirá informe anual a las comisiones séptimas de Cámara y Senado sobre el desarrollo y ejecución de la política pública.

Artículo 18. Vigencia y derogatoria. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

PROYECTO DE LEY N° ____ de 2012 CÁMARA.

“Por la cual se reglamenta la actividad del vendedor informal y se dictan otras disposiciones”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ASPECTOS GENERALES

La presente iniciativa pretende establecer los parámetros que permitan lograr la reconciliación y la armonización entre la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales, así como garantizar el disfrute pleno de los derechos fundamentales y procurar la inclusión económica en el mercado laboral y económico de esta población vulnerable.

La población objeto de este proyecto realiza el trabajo por cuenta propia o independiente, mediante una actividad comercial en el espacio público, la cual se constituye en una alternativa para hacerle frente al problema de desempleo y a las dificultades derivadas de pertenecer al sector formal de la economía en Colombia. Sin embargo y por las razones de legalidad que enfrenta esta población para desarrollar su actividad, el Estado debe concebir un marco jurídico y definir políticas que permitan ofrecer soluciones de manera gradual en todo el País a esta alternativa de subsistencia.

Es en consideración a lo anterior, y en desarrollo del derecho fundamental al trabajo, consagrado en la Constitución Política en el artículo 25, y del artículo 54 (obligación del Estado de habilitar profesional y técnicamente a sus conciudadanos y propiciar su ubicación laboral) del mismo estatuto, se presenta este proyecto encaminado a regular las condiciones en que podrán ejercer su actividad los vendedores informales.

Para ello, se brindarían garantías mínimas para la realización de su labor, y se generan mecanismos para la paulatina transición de la actividad a través de la inserción de este grupo poblacional a actividades formales de la economía.

Los colombianos vemos cómo en el día a día se incrementa el número de vendedores informales, lo cual permite concluir que en el país miles de personas se ven obligadas a acudir a la llamada coloquialmente “cultura del rebusque” para garantizar su subsistencia y la de sus familias, personas que pertenecen principalmente a grupos marginados, desempleados, pobres, y en general población vulnerable.

En las cifras de ocupación informal en Colombia, de acuerdo a la información del mercado laboral del DANE, se evidencia que es importante establecer políticas públicas de inclusión social para el desarrollo estructural del País; políticas que

logren el bienestar para la población trabajadora informal, encaminada a disminuir esa alarmante cifra de informalidad que hoy llega a estar entre el 56% y el 62% del total de la población en edad de laborar.

Un estudio reciente del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República determinó que *“cerca del 45% de los individuos en la muestra tomada por el estudio pertenecen al sexo femenino. Con referencia a otras características personales, se puede mencionar que el 56% de las personas ocupadas son casadas o viven en unión libre. Asimismo, cerca del 47% de los individuos de la encuesta son jefes cabezas de hogar, mientras que el 20% son esposos, compañeros o cónyuges del jefe de hogar. Aproximadamente el 66% de los hogares tienen presencia de menores de edad.*

“En cuanto al nivel educativo, el 67% de estos individuos poseen estudios de básica primaria o secundaria, mientras que el 31% alcanzaron estudios universitarios. Los que sólo alcanzan preescolar o ningún nivel educativo representarían el 2% de la muestra.”

Algunos de los resultados del mencionado estudio fueron los siguientes:

“1. Los informales son principalmente individuos de bajos ingresos, trabajan mayoritariamente en establecimientos de menor tamaño y viven en ciudades periféricas.

2. Las mujeres son más afectadas por la informalidad.

3. Los trabajadores más jóvenes son los que tienen más probabilidad de ser informales, aunque la relación con la edad es no lineal. La probabilidad de ser informal se reduce con la edad, pero en determinado punto, vuelve a aumentar, (...) Este resultado parece sugerir que la incidencia de la informalidad varía de acuerdo al ciclo de vida, en un principio los trabajadores más jóvenes tienen mayor probabilidad de estar en el sector informal, pues dado que las tasas de desempleo son altas (sic) los más jóvenes, su alternativa es la de iniciarse en el mercado laboral siendo informales; hacia el final del ciclo de vida, nuevamente las probabilidades de ser informales son altas, y en edades medias, donde los trabajadores presumiblemente son más productivos, tienen mayor probabilidad de engancharse en el sector formal.

4. Tienen menos probabilidad de ser informales los individuos en unión libre o casados, frente a los solteros.

5. Los hogares con presencia de menores de edad son más propensos a estar enganchedos en trabajos informales.

6. A mayor tiempo de búsqueda de trabajo desde el anterior empleo, mayor probabilidad de que el trabajo actual sea informal, coincidiendo con los resultados encontrados por Roldán y Ospino (2009) para el Caribe.

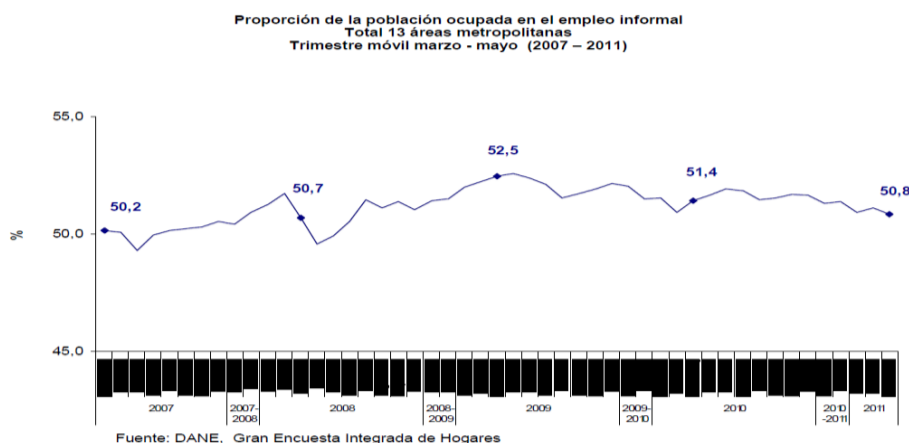
7. Los informales son principalmente trabajadores con bajo o ningún nivel educativo, pero la relación con la informalidad no es homogénea a través de los diferentes niveles educativos. Esto es, a mayor nivel educativo, las probabilidades

de estar vinculado al sector informal se reducen cada vez en mayor proporción; por ejemplo, el pasar de preescolar o ningún nivel educativo, a estudios universitarios reduce la probabilidad de ser informal en más del doble de lo que se reduce al comparar con un trabajador que sólo tiene estudios secundarios.

8. En comparación con los empleados privados, hay mayor probabilidad de encontrar un trabajador informal en los empleos del gobierno, los empleados domésticos o por cuenta propia, los patrones o empleadores, trabajadores familiares, o incluso, los peones o jornaleros. De estas categorías ocupacionales, los de cuenta propia y los trabajadores familiares son los que mayor efecto marginal presentan. Esto quiere decir que el aumento en la probabilidad de ser informal en relación a los empleados privados, es mucho mayor si se trata de un trabajador por cuenta propia o un trabajador familiar.

9. Dejando como categoría de referencia el sector primario (agricultura, pesca y minería), el pertenecer a los sectores de suministro de electricidad, hotelería, servicios financieros e inmobiliarios, administración pública y otros servicios sociales, reduce las probabilidades de encontrarse en un trabajo informal. Por el contrario, el trabajar en la rama manufacturera, construcción y en la educación, aumenta las probabilidades de ser empleado informal con respecto a las probabilidades que se darían si se está empleado en el sector primario.”¹

En esta gráfica se puede observar detalladamente, como la informalidad laboral, ha estado históricamente en un rango muy alto, en donde siempre ha superado el 50% de la población en edad de laborar.²



Los indicadores laborales del DANE permiten analizar una realidad concreta en el mercado laboral: en el 2009 la tasa de desempleo llegó a un índice del 12% que representa a cerca de 2 millones 513 mil personas y con una tasa de ocupación del 53.9% que representa a cerca de 18 millones 427 mil personas; la tasa de subempleo subjetivo 29.7% y la tasa de subempleo objetivo fue de 10.9%. Es necesario recalcar que las ventas informales hacen parte del subempleo.

¹ DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL. BANCO DE LA REPÚBLICA. Informalidad Laboral en las áreas urbanas de Colombia. Luis Armando Galvis.

² www.dane.gov.co/files/investigaciones. Gran Encuesta de Hogares Integrada.

Para el caso de las tasas de desempleo subjetivo y objetivo, se presentó la siguiente tendencia, en comparación con el mismo mes del año 2010: la tasa de *subempleo subjetivo* aumentó en 2.5% llegando al 32.8% mientras que la tasa de *subempleo objetivo* aumentó en 0.9% pasando del 11.6% al 12.5%.

En la siguiente tabla se observa la población ocupada total, de manera informal y también el total de personas ocupadas formalmente, por tamaño de empresas hasta de cinco trabajadores. En ella se observa la distribución del trabajo informal en Colombia y muestra como existen (mayo de 2011), un total de Dos millones ochocientos noventa y cinco mil (2.895.000) personas trabando por cuenta propia; existen veinte mil (20.000) trabajadores sin remuneración en empresas o de otros hogares.

Población ocupada total, informal y formal para tamaño de empresa hasta 5 trabajadores según posición ocupacional (en miles)

| Concepto | Nov 10- Ene 11 | Dic 10 - Feb 11 | Ene - Mar 11 | Feb - Abr 11 | Mar - May 11 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total 13 áreas | 9.390 | 9.270 | 9.250 | 9.417 | 9.506 |
| Emp. particular | 4.349 | 4.278 | 4.260 | 4.311 | 4.391 |
| Emp. gobierno | 382 | 381 | 394 | 386 | 382 |
| Emp. domestico | 373 | 391 | 383 | 387 | 374 |
| Cuenta propia | 3.545 | 3.474 | 3.476 | 3.582 | 3.589 |
| Patron o empleador | 444 | 445 | 449 | 468 | 493 |
| Trabajador familiar sin remuneración | 248 | 252 | 239 | 237 | 235 |
| Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares | 28 | 28 | 28 | 23 | 22 |
| Jornalero o Peón | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| Otro | 10 | 10 | 13 | 16 | 14 |
| <i>Informales</i> | 4.816 | 4.762 | 4.709 | 4.814 | 4.832 |
| Emp. particular | 971 | 950 | 926 | 920 | 932 |
| Emp. domestico | 369 | 387 | 379 | 386 | 373 |
| Cuenta propia | 2.855 | 2.805 | 2.795 | 2.889 | 2.895 |
| Patron o empleador | 357 | 355 | 360 | 374 | 390 |
| Trabajador familiar sin remuneración | 233 | 234 | 220 | 220 | 218 |
| Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 |
| Jornalero o Peón | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Formales</i> | 4.574 | 4.508 | 4.541 | 4.603 | 4.674 |
| Emp. Particular | 3.378 | 3.328 | 3.334 | 3.390 | 3.459 |
| Emp. Gobierno | 382 | 381 | 394 | 386 | 382 |
| Emp. Domestico | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Cuenta propia | 690 | 670 | 681 | 693 | 694 |
| Patron o empleador | 86 | 89 | 90 | 94 | 103 |
| Trabajador familiar sin remuneración | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 |

Estas cifras deben ser tenidas en cuenta para implementar las políticas necesarias, que permitan la inclusión de este sector en la economía formal, fortaleciendo y defendiendo sus derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo, a la salud, a la educación etc.

Según el lugar de trabajo, se presentan las siguientes estadísticas, correspondiente a marzo – mayo de 2011, en las 13 áreas analizadas, se encontró que hay quinientos veinte mil (520.000), trabajadores informales en la calle; hay cuatrocientos cincuenta y tres mil (453.000) trabajadores informales puesta a puesta.

| Población ocupada total, informal y formal para tamaño de empresa hasta 5 trabajadores según lugar de trabajo (en miles) | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Concepto | Nov 10 - Ene 11 | Dic 10 - Feb 11 | Ene - Mar 11 | Feb - Abr 11 | Mar - May 11 |
| Total 13 áreas | 9.390 | 9.270 | 9.250 | 9.417 | 9.506 |
| En su vivienda | 972 | 949 | 952 | 982 | 975 |
| En otras viviendas | 979 | 977 | 958 | 974 | 959 |
| En kiosco-Caseta | 22 | 19 | 23 | 23 | 29 |
| En un vehículo | 621 | 635 | 651 | 625 | 600 |
| De puerta en puerta | 723 | 691 | 726 | 755 | 747 |
| Sitio al descubierto en la calle | 609 | 593 | 589 | 615 | 642 |
| Local fijo | 5.116 | 5.051 | 4.987 | 5.064 | 5.177 |
| En el campo o área rural | 61 | 62 | 64 | 72 | 75 |
| En una obra en construcción | 274 | 277 | 279 | 286 | 287 |
| En una mina o cantera | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Otro | 8 | 15 | 17 | 17 | 11 |
| Informal | 4.816 | 4.762 | 4.709 | 4.814 | 4.832 |
| En su vivienda | 856 | 838 | 831 | 865 | 853 |
| En otras viviendas | 893 | 905 | 883 | 906 | 882 |
| En kiosco-Caseta | 21 | 18 | 22 | 22 | 28 |
| En un vehículo | 415 | 418 | 425 | 397 | 393 |
| De puerta en puerta | 440 | 430 | 452 | 472 | 453 |
| Sitio al descubierto en la calle | 506 | 492 | 483 | 502 | 520 |
| Local fijo | 1.543 | 1.524 | 1.480 | 1.508 | 1.559 |
| En el campo o área rural | 33 | 36 | 34 | 41 | 39 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| En una obra en construcción | 105 | 97 | 94 | 96 | 101 |
| En una mina o cantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otro | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| <i>Formal</i> | 4.574 | 4.508 | 4.541 | 4.603 | 4.674 |
| En su vivienda | 116 | 112 | 121 | 117 | 122 |
| En otras viviendas | 86 | 72 | 75 | 69 | 77 |
| En kiosco-Caseta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En un vehículo | 206 | 216 | 226 | 228 | 206 |
| De puerta en puerta | 283 | 261 | 275 | 283 | 294 |
| Sitio al descubierto en la calle | 103 | 101 | 106 | 113 | 122 |
| Local fijo | 3.573 | 3.526 | 3.507 | 3.556 | 3.618 |
| En el campo o área rural | 28 | 26 | 30 | 31 | 36 |
| En una obra en construcción | 170 | 180 | 185 | 190 | 186 |
| En una mina o cantera | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Otro | 5 | 11 | 12 | 12 | 7 |

Según la rama de actividad, la mayor parte de los trabajadores informales está en el sector del comercio, hoteles y restaurantes concentran un total de un millón novecientos noventa y nueve mil (1'999.000) personas del total de las 13 áreas metropolitanas consultadas como trabajadores informales.

Población ocupada total, informal y formal para tamaño de empresa hasta 5 trabajadores según rama de actividad (en miles)

| Concepto | Nov 10 - Ene 11 | Dic 10 - Feb 11 | Ene - Mar 11 | Feb - Abr 11 | Mar May 11 |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Total 13 áreas | 9.390 | 9.270 | 9.250 | 9.417 | 9.506 |
| No informa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura | 78 | 86 | 85 | 105 | 105 |
| Explotación de minas y canteras | 27 | 24 | 28 | 29 | 29 |
| Industria Manufacturera | 1.679 | 1.623 | 1.576 | 1.618 | 1.634 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 58 | 54 | 52 | 53 | 55 |
| Construcción | 601 | 597 | 613 | 619 | 604 |
| Comercio, hoteles y restaurantes | 2.869 | 2.836 | 2.790 | 2.853 | 2.913 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 917 | 915 | 937 | 933 | 908 |
| Intermediación financiera | 190 | 182 | 190 | 177 | 187 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 910 | 918 | 925 | 952 | 962 |
| Servicios, comunales, sociales y personales | 2.062 | 2.034 | 2.052 | 2.075 | 2.109 |
| <i>Informales</i> | 4.816 | 4.762 | 4.709 | 4.814 | 4.832 |
| No informa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura | 43 | 45 | 43 | 56 | 54 |
| Explotación de minas y canteras | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Industria Manufacturera | 661 | 638 | 623 | 660 | 666 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Construcción | 365 | 362 | 351 | 369 | 359 |
| Comercio, hoteles y restaurantes | 2.024 | 1.989 | 1.943 | 1.972 | 1.999 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 553 | 551 | 565 | 558 | 552 |
| Intermediación financiera | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 369 | 378 | 389 | 384 | 381 |
| Servicios, comunales, sociales y personales | 778 | 777 | 770 | 794 | 802 |
| <i>Formales</i> | 4.574 | 4.508 | 4.541 | 4.603 | 4.674 |
| No informa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura | 36 | 42 | 41 | 49 | 51 |
| Explotación de minas y canteras | 24 | 21 | 26 | 27 | 27 |
| Industria Manufacturera | 1.018 | 986 | 953 | 958 | 968 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 56 | 53 | 50 | 51 | 53 |
| Construcción | 236 | 236 | 263 | 250 | 245 |
| Comercio, hoteles y restaurantes | 844 | 846 | 847 | 881 | 914 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 364 | 364 | 371 | 375 | 356 |
| Intermediación financiera | 172 | 164 | 171 | 161 | 171 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 541 | 540 | 536 | 568 | 582 |
| Servicios, comunales, sociales y personales | 1.284 | 1.257 | 1.282 | 1.281 | 1.307 |

El trabajo independiente no es de naturaleza homogénea en su composición, por el contrario, presenta tipologías internas que deberían ser consideradas en el diseño de las políticas sobre protección y seguridad social, educación, vivienda etc. Para buena parte de los trabajadores les resulta difícil la subsistencia y la solución no es la implementación de políticas para su vinculación a la seguridad social, prueba de ello los problemas presentados con la implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, entre otros aspectos.

CRECIMIENTO URBANO, COMERCIO E INFORMALIDAD

La tendencia de crecimiento de los centros urbanos es de un 50% más rápida que la población total de un país, lo que muestra que el crecimiento se concentra en las áreas metropolitanas y en los ejes o corredores urbanos, seguido de algunas ciudades intermedias (IGAC, 2009).

Según cifras del IGAC, los terrenos urbanizables están concentrados en pocos propietarios (36.019) los cuales poseen una extensión de 175.795 hectáreas, con un promedio de 5 has por persona. Estos terrenos de más de 10.000 m², que tienen la menor densidad de construcción y el avalúo catastral más bajo, constituyen el 58.2% del área urbana nacional y están convertidos en una reserva para la construcción comercial y de vivienda para estratos altos.

En un medio tan densamente poblado, donde hay 6.7 millones de propietarios, la gran concentración de tierra en manos de una marcada minoría (0.54%) es fiel reflejo de un proceso de desequilibrio social.

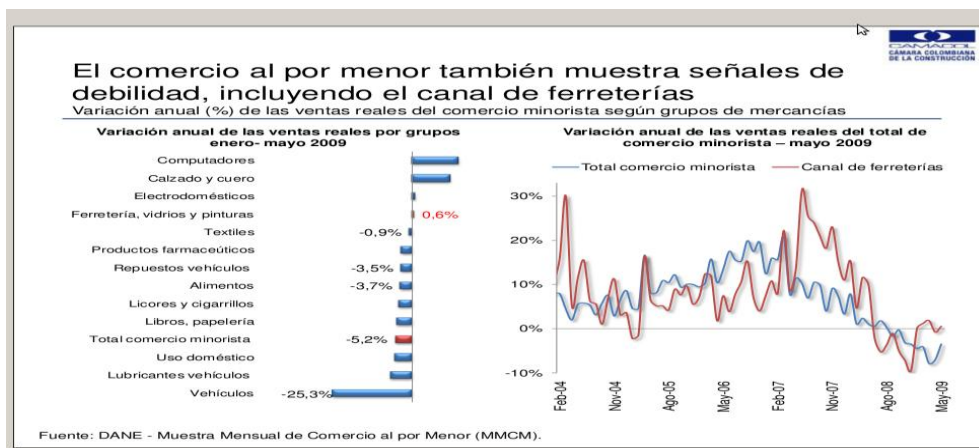
En los centros urbanos hay 412 millones de m² construidos, entre viviendas e inmuebles de utilidad económica e institucional. La mayor concentración del área construida se encuentra en los predios menores de 200 m², en los conjuntos de propiedad horizontal, donde el 44.8% de las construcciones utiliza el 9.6% del terreno disponible, y en los multifamiliares, con 13.915 m² de construcción por hectárea.

En las áreas densificadas o de mayor conectividad urbana, por lo general, se ubican las grandes superficies, los centros comerciales residenciales y parques comerciales. El problema que se presenta en las ciudades colombianas es que los grandes almacenes de comercio ejercen una gran presión económica sobre los negocios de economía popular y lleva a la desaparición de un buen número de comercios tradicionales. Esto lleva al endeudamiento de sectores populares, al aumento del desempleo, a más informalidad en la calle, a una frustración y empobrecimiento de unos sectores poblacionales medios y bajos.

La presión de los grandes almacenes sobre las actividades populares, ocasiona desigualdades que se manifiestan en segregación social y económica. La lucha

contra estas diferencias significa que es posible compartir la ciudad a nivel de espacios urbanos y de manera equitativa, que se aumenten los sitios y los momentos de encuentro y, sobre todo, las posibilidades de intercambio que eviten la segregación. Entre las responsabilidades del Estado Social de Derecho está el permitir el goce del derecho al trabajo formal de sus habitantes.

El decaimiento de las actividades comerciales al por menor, que es dónde más se emplean los estratos poblacionales 1,2 y 3, se observa en al encuesta Dane, 2009. Al disminuirse las ventas de los negocios de comercio minorista, se incrementa el desempleo y la informalidad.³



Fuente: Pinto de Hart, M. (2009), Camacol.

No obstante, El gobierno Nacional, Municipal y Distrital en conjunto con los actores económicos y sociales puede proveer bienes y prestar servicios a la población en general y, en particular, restituir los derechos a personas excluidas de los mismos. Una manera es posibilitando una adecuada gestión financiera del suelo, traducida en el uso de las herramientas con que cuenta la Ley 388 y que arroje un adecuado cobro de plusvalía en la distribución de cargas y beneficios.

En tal sentido, la presente iniciativa propone tres formas o mecanismos de materializar sus objetivos:

- Actualmente las grandes superficies, centros comerciales residenciales y parques comerciales, en sus áreas libres y espacios análogos pueden implementar espacios no convencionales que sirvan de instrumento de gestión económica y ser utilizados por vendedores informales. Los espacios análogos permiten operaciones para el mejoramiento del aprovechamiento económico del suelo. En zonas deterioradas permiten elevar la calidad del parque inmobiliario generando alternativas para trabajadores informales en procesos de formalización económica.
- En todo Proyecto de construcción inmobiliaria para establecimientos de

³ Pinto de Hart, M. (2009) Panorama del sector de la construcción. Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Presidente Ejecutiva, 13 de agosto de 2009

grandes superficies, centros comerciales residenciales y parques comerciales, que se realice en el país, se garantice la construcción y comercialización de Locales Comerciales de Interés Social (LCIS).

- En concordancia con la política de vivienda de interés social, en este caso, porcentajes mínimos de V.I.S. en el tratamiento de desarrollo (artículo 339 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 233 del Decreto 469 de 2003), exige que se destine para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) subsidiable, unos porcentajes mínimos de construcción de unidades de viviendas en relación al área de suelo de expansión y al área de suelo urbano. Estos porcentajes varían entre el 20% y el 50%.
- En ese mismo sentido y para efectos de esta Ley, se exige que para el total de los locales destinados en los proyectos inmobiliarios nuevos con destino comercial, un 20% corresponderá a Locales Comerciales de Interés Social (LCIS), con las mismas especificaciones y tipología de los locales comerciales destinados para comercio formal. Como lo detalla la norma de VIS las obligaciones mínimas porcentuales pueden cumplirse al interior de los predios objeto del tratamiento de desarrollo.
- Como política de equidad social e inclusión, el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, fomentará y garantizará la construcción inmobiliaria de Proyectos comerciales de interés social. Esta iniciativa creada y dirigida directamente por el gobierno contempla el marco de la política social de emprendimiento y financiación de proyectos sociales. Los proyectos pueden ser respaldados por la política de subsidios del gobierno, a fin de garantizar la formalización en la actividad económica de los vendedores informales en Colombia.

Es importante resaltar que el comercio subsidiado es una estrategia válida ante los obstáculos estructurales de las reglas de juego que impone el libre mercado, y que coloca en desventaja a las actividades de la economía popular. El comercio subsidiado comprende:

“(...) a aquellos sistemas de distribución de bienes y servicios de consumo final o intermedio donde el Estado otorga cierto recurso o privilegio especial para que sea transferido al consumidor o usuario en la medida de su necesidad”.

En el comercio subsidiado se posibilitan prácticas que reciben beneficios del Estado, como exención de impuestos, utilización de espacios públicos, entre otros.

Esta iniciativa contribuye a los propósitos de la Responsabilidad Social Empresarial, inmersa dentro de los principios que la libertad de empresa, y los objetivos del desarrollo sostenible y sustentable. El equilibrio requerido de la triada Estado-Mercado y Ciudadanía, entre el crecimiento económico jalonado por los capitales comerciales, y lo social, posibilita que las grandes superficies, centros comerciales residenciales y parques comerciales, cumplan con “el deber de

perseguir metas a largo plazo para beneficio de la sociedad” (Robbins, S; Decenzo, D. 2005)⁴, en una responsabilidad compartida con los vendedores informales y sus organizaciones. Desde este punto de vista, la responsabilidad social reviste un imperativo moral de contribuir en la mejora de la sociedad al posibilitar la inclusión social de poblaciones vulnerables al mercado formal, y elevar su calidad de vida.

Al disminuirse la segregación social y económica se obtiene la dignificación de las actividades comerciales populares, se recupera y mejora el espacio público, se preserva el paisaje urbano, se promueve la convivencia en espacios públicos comerciales y la residencialidad en zonas en deterioro. De esa manera, la utilización del suelo por parte de los grandes almacenes de comercio tiene un enfoque de equidad social y de inclusión, y contribuye a una mejor función social de la propiedad. Además, sirve de vehículo para hacer efectivos los derechos constitucionales de trabajo, vela por la creación y la defensa del espacio público, y por la protección del medio ambiente, en un compromiso de Responsabilidad Social Empresarial.

Por otro lado, la normatividad urbana ha visto en las cesiones urbanísticas obligatorias un mecanismo idóneo para la generación de espacio público, como también una clara expresión de la función social de la propiedad. Con esta figura el propietario que cede una parte del área de su terreno obtiene el beneficio de urbanizar, y a la vez, aumenta el valor del predio por las obras de urbanización.

Lo que hace el propietario es una transferencia a la administración pública de una parte de su terreno a urbanizar y se acoge a las condiciones normativas.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Sin duda la constante tensión que se presenta desde el ámbito del derecho constitucional entre el derecho al mínimo vital, y al trabajo de los vendedores informales y el mandato constitucional que tienen las administraciones territoriales de asegurar la protección y recuperación del espacio público para que el colectivo de los habitantes puedan disfrutar del mismo, imponen la necesidad de generar una herramienta que sin vulnerar estos derechos comprometidos se constituya en una salida, para este conflicto que por décadas ha venido enfrentando nuestro país a lo largo de todo el territorio nacional.

Desde esta perspectiva, una de las propuestas contenidas en el proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso de la República, consiste en la creación de los Locales Comerciales de Interés Social, LCIS, en todo el territorio nacional, los cuales le permiten a la Nación, los Municipios y Distrito, atender las numerosas necesidades de generación, recuperación, administración, defensa y sostenibilidad de sus zonas urbanas y vecinales.

⁴ Robbins, S y Decenzo, D. (2005). Fundamentos de administración. Conceptos esenciales y aplicaciones. Tercera Edición, Perntice Hall. 2005.

La Constitución Política de Colombia de 1991, respecto del tema tratado, consagra en los siguientes artículos algunos apartes jurídicos que dan luz sobre la importancia del Proyecto de Ley, así:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones

de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Con respecto al concepto de espacio público y su protección constitucional, en términos de la Corte Constitucional, se considera que la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre los cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos. En este sentido, la función de regular el uso del suelo y del espacio público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no es apenas una facultad sino un deber de prioritaria atención.

Cabe mencionar que frente a la ocupación del espacio público por vendedores informales para resolver los conflictos que surgen entre la administración y los ocupantes del espacio público, la jurisprudencia constitucional colombiana ha optado por buscar fórmulas de conciliación para que la administración logre cumplir con el deber de salvaguardar el espacio público aplicando el principio de confianza legítima como mecanismo para conciliar, de un lado el interés general que se concreta en el deber de la administración de conservar y preservar el espacio público y, de otro lado, los derechos al trabajo e igualdad de las personas que ejercen el comercio informal.

Artículo 88. La Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño interferido a los derechos e intereses colectivos.

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Artículo 357. Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos.

Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios.

Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios: sesenta por ciento en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de 50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas rurales. Cada cinco años, la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución.

Parágrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento de 1993 hasta alcanzar el veintidós por ciento como mínimo en el 2002. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley.

Estarán excluidos de la participación anterior, los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine y, por el primer año de vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica.

Artículo 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica.

Se exceptúan:

1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios.
- 2; Las destinadas para inversión social.
3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Artículo. 15. Modificado. Ley 902 de 2004, Art. 1°. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.

En todo caso los municipios que integran las áreas metropolitanas deberán ajustarse en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana, en los asuntos de su competencia. (...)

Ley 9 de 1989. Ley de Reforma Urbana, determina que:

Artículo 5. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos.

[...]

Para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.

Artículo 6. El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intendencial, por iniciativa del alcalde o intendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes.

[...]

El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las Disposiciones vigentes.

[...]

Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.

Artículo 7. “Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear de acuerdo con su organización legal, entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores. [...]

SUSTENTO JURISPRUDENCIAL

La Corte Constitucional en la Sentencia T - 772 de 2003, ordenó que:

“(…) se otorgue a los representantes de los vendedores informales la oportunidad de participar activamente en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público que diseña y adelanta el establecimiento público que él dirige, así como en la formulación de cualquier cambio o modificación a las mismas, con miras a garantizar efectivamente que tales políticas, así como los programas y medidas a través de los cuales se ejecuten, den pleno cumplimiento a las pautas constitucionales señaladas en el acápite 3.3. de esta providencia, a saber, (i) estar precedidas de un análisis cuidadoso de la evolución de la situación social y económica real de los destinatarios de tales políticas, programas o medidas, (ii) asegurar que las alternativas económicas ofrecidas a los vendedores informales correspondan en su alcance y cubrimiento a las dimensiones cambiantes de la realidad social y económica respecto de la cual habrán de aplicarse las políticas, programas y medidas en cuestión, y (iii) garantizar que dichas alternativas económicas sean ofrecidas a sus destinatarios con anterioridad al adelantamiento de las medidas de desalojo y decomiso tendientes a recuperar el espacio público, dando prioridad a los vendedores informales estacionarios y semiestacionarios.”

La Corte Constitucional, Sentencia SU-601A de 1999, determina que:

Al remitirnos a la historia jurídica de nuestro país no podemos pasar por alto el contenido del término de Bienes Públicos y de Uso Público.

Código Civil de 26 de Mayo de 1873, consagra en los siguientes artículos:

[...]

Artículo 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.

[...]

Artículo 678. Uso y goce de bienes de uso público. El uso y goce que para el tránsito, riesgo, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.

Artículo 351, del Decreto 619 de 2000, Conformación de Zonas de Comercio y Servicios e Industriales en Área Urbana Integral.

La implantación de nuevos usos de comercio y servicios e industriales en las Áreas Urbanas Integrales se regula por lo siguiente:

1. Para el Comercio y los Servicios de escala metropolitana o urbana se exige la conformación de zonas con área mínima de 1.5 hectáreas netas urbanizables, La zona comercial debe tener acceso desde la malla vial intermedia y cumplir con los demás requisitos señalados en el Artículo 336: "Normas para los usos de comercio y servicios, del presente subtítulo".

2 El comercio vecinal podrá localizarse linealmente en los primeros pisos de edificaciones multifamiliares, en ejes de la malla intermedia acompañados de diseños específicos de espacio público.

[...]

CONVENIENCIA

El crecimiento constante del desempleo y la informalidad, que ocupa un lugar preponderante en la agenda del Gobierno, en los debates de los legisladores, en las discusiones de los gremios, en las organizaciones de trabajadores, ONG's, periodistas, academia y ciudadanos, se hace evidente con los vendedores informales que encuentran en el espacio público una oportunidad de trabajo y sobrevivencia, afectando a otros actores de la sociedad. Por ello consideramos que es menester que se de una salida a todos los actores que se ven impactados por la realidad que viven los vendedores informales. La salida sin duda necesariamente tiene que pasar por la construcción de una política pública que permita generar acciones desde el Gobierno Nacional que contribuyan a lograr la inserción laboral y económica de estos colombianos que propone el proyecto, así como la implementación de los otros mecanismos que se plantean.

Por todas las anteriores consideraciones sometemos ante ustedes honorables congresistas la presente iniciativa para su consideración, votación y aprobación

De los honorables Congresistas,